

## PROYECTO DE LEY

### El Senado y la Cámara de Diputados De la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ...

#### Sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1º.- Incorpórase como inciso j) del Artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, el siguiente texto:

“j) Las sumas pagadas por el contribuyente en concepto de todas las herramientas y servicios con fines educativos para quienes revistan el carácter de cargas de familia en los términos del apartado 2 del inciso b) del artículo 30 de esta ley y quienes tengan a su exclusivo cargo hijos mayores de edad y menores de 24 años inclusive, que cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio, que les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente, conforme lo prevé el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, hasta el límite del CUARENTA POR CIENTO (40%) del importe establecido en el inciso a) del mencionado artículo 30.”

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

**Emiliano Benjamín Yacobitti**  
Diputado Nacional

**Acompañan con su firma: Dolores Martinez; Danya Tavela; Pablo Cervi; Marcela Antola; Carla Carrizo; Martín Tetaz; Victoria Tejeda; Hugo Romero; Alejandro Finocchiaro; Gerardo Milman; Margarita Stolbizer; Paula Oliveto; Diego Santilli; Pamela Verasay; Cristian Ritondo; Lidia Ascarate; Graciela Camaño; Fabio Quetglas; Daniel Arroyo; Gustavo Hein.**

## **FUNDAMENTOS**

Señora Presidenta:

El 21 de abril del 2021 se promulgó la Ley N° 27.617 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, entre ellas se incluyó las herramientas y cursos educativos propios y de las cargas de familia como beneficio social a considerarse dentro de la exclusión del gravamen (incorporado en el artículo 111 de la ley).

No obstante, este tratamiento legislativo ha afectado el principio tributario de igualdad y equidad ya que ha dejado en una situación desventajosa a aquellos que se encuentran por fuera de la relación de dependencia, pero aún así desarrollan un trabajo unipersonal todos los días, por ejemplo. En pos de poder ejecutar una correcta política pública y extender este derecho al conjunto de los trabajadores es que surge la presentación de este proyecto de ley.

Asimismo, la propuesta aquí presente ha sido convalidada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, institución cuyo propósito es alcanzar la más alta calidad en la práctica contable y ejecución de normas tributarias. Vale mencionar que en las páginas n° 83 y 84 de su documento titulado "Lineamientos para una reforma tributaria" este grupo colegiado, que representa a todos los consejos profesionales de las ciencias económicas a lo largo y ancho de nuestro país, incluyó la sugerencia de deducción de todo concepto educativo del impuesto a las ganancias.

La educación pública ha sido el pilar sobre el que la Argentina pudo constituir durante el siglo XX una sociedad que fue una de las más igualitarias de América Latina. Nuestra Ley N° 1.420 estableció la educación primaria obligatoria, laica y gratuita que sentó el precedente para una de las pocas políticas públicas sostenidas en el tiempo y que tuvo su continuidad en su extensión a la escuela secundaria y, también, en la gratuidad de las universidades nacionales.

Sin embargo, las sucesivas y recurrentes crisis introdujeron cambios sociales muy importantes que alteraron esa cualidad equitativa de nuestra sociedad, volviéndola casi una nostalgia del pasado, pero también un objetivo a recuperar lo más pronto que podamos. Al estancamiento del PBI per cápita de las últimas décadas, se le debe agregar un crecimiento geométrico de la pobreza y una significativa alteración en la

distribución del ingreso, concentrándose cada vez más en una minoría y generando una reducción de la clase media. Esto nos deja una enseñanza directa que nos debe mover a la acción concertada: la equidad es clave para el crecimiento, no un impedimento. La otra enseñanza es que esa distribución tiene que ser operada a través de las instituciones de la democracia y no por medio de choques pretorianos y conflictos no mediados que traen incertidumbre e inestabilidades perniciosas.

Una educación de calidad tiene por objeto el desarrollo completo de los seres humanos y es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de niños, niñas y adultos, sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad. Asimismo, la educación de calidad puede contribuir a potencialmente disminuir la brecha de género en beneficio de las mujeres.

La educación tiene la particularidad de ser un bien que no se gasta al usarlo. Que el beneficio personal que brinda el poseerla -en términos de mayores capacidades para buscar, encontrar y desarrollar "horizontes de vida"- redunde también en una mayor capacidad productiva social. También, y quizás lo más importante, permite a las sociedades encontrar un balance no antitético entre el valor de la "libertad" y el valor de la "igualdad", como bien lo ha dicho el Premio Nobel Amartya Sen. El bienestar social producido genera un verdadero círculo virtuoso de integración social y crecimiento, el que se auto refuerza con una mejor salud pública, menor tasa de criminalidad, un mejor medioambiente, mayor participación comunitaria y política y una mejor cohesión social.

Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y se eliminen los obstáculos para alcanzar una educación de calidad.

Toda actividad de aprendizaje nuevo brinda a la persona tanto un efecto inmediato (el de estar "integrado" a su comunidad), pero también resulta en una inversión a futuro con un retorno que es evidente: aquellos con mejor educación tienen más posibilidades de progreso que los que no han podido acceder a ella.

Así, diversos estudios a nivel global encuentran que los distintos niveles educativos otorgan retornos sociales de entre el 10% y 15% y privados de entre el 15% y 25%, dependiendo del estrato educativo. Puntualmente, Latinoamérica detenta retornos privados iguales a los del promedio del mundo y sociales algo por debajo de la media, pero esta diferencia no resulta significativa.

Del mismo modo, expertos en la materia han incursionado en el estudio del impacto

de la educación en la economía y en todos los casos se observa una correlación positiva. Cambios porcentuales tanto en la matriculación (acceso a la educación), como en los resultados de las pruebas de aprendizaje (calidad educativa) se asocian a aumentos significativos en la tasa de crecimiento del PBI per cápita y a mejoras en la productividad del trabajo. Esto último, no sólo se evidencia en quien presenta un mayor atributo individual, sino que se manifiesta en un efecto spillover para el resto de los participantes.

Conforme lo mencionado precedentemente, mayores grados de titulación también tienen consecuencias positivas en la salud, el medio ambiente, los índices de criminalidad, la cohesión social, el ejercicio democrático, entre otras. Entre las primeras, se destacan una menor tasa de mortalidad infantil y embarazo adolescente en madres con mayor nivel de instrucción. En el plano de la seguridad, mayores niveles educativos y una menor desigualdad se encuentran correlacionados con menores tasas de criminalidad. En la esfera democrática, los derechos civiles aumentan principalmente con el nivel de democratización per se, pero también con las tasas de matriculación en la educación secundaria, encontrándose en varios estudios como la contribución de mayor significatividad después del ingreso per cápita. Por último, diversos análisis de países desarrollados indican que el 50% de los graduados con título universitario están fuertemente familiarizados con los problemas sociales, políticos y económicos que les rodean, mientras que ese porcentaje se reduce al 30% para graduados de secundaria y 20% para nivel primario.

Por otro lado, una de sus contribuciones al crecimiento económico se canaliza a través del estímulo y aceleración en la tasa de cambio tecnológico, la cual en las últimas décadas se ha tornado fuertemente dependiente de la ciencia. Así, las inversiones en educación permiten mejorar la eficiencia con la que se asignan recursos ante cambios en las condiciones económicas.

En Argentina, el "premio" al título universitario es un salario 70% superior al de un individuo con sólo título secundario; ello se verifica considerando un promedio de los últimos 20 años. En base a este significativo diferencial de salarios observado para los egresados de la educación superior, esos mayores ingresos le permiten al Estado percibir retornos fiscales positivos, lo cual justifica cómodamente la inversión en educación pública.

Entendiendo que la formación educativa funciona como insumo para la producción (ya que el asalariado sólo tiene para ofrecer su fuerza de trabajo, es decir, sus capacidades) ese costo podría estar sujeto a tratamientos impositivos especiales como

ocurre con el endeudamiento de las empresas, el cual permite deducirse del impuesto a las ganancias societarias. La idea, que es la base de este proyecto de ley, es transformar una cuestión de gasto público a nivel nacional y provincial en una decisión de inversión social que queda en manos del contribuyente. Parte de ese dinero que el sujeto invierte en su educación o en la de sus hijos podrá ser descontada del impuesto a las ganancias, aliviando sus gastos y, por otro lado, volviéndose más eficaz y efectiva la inversión social al quedar descentralizada e incentivar el crecimiento de las actividades educativas en el plano local.

Nuestro país cuenta con una serie de casos en los que se introdujeron cambios al tratamiento del impuesto a las ganancias. La Ley N° 20.628 especifica que para establecer la ganancia neta se restará de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla. Asimismo, la reforma tributaria bajo la Ley N° 27.430 disminuyó la alícuota sobre las ganancias de las sociedades, que pasó del 35% al 30% para los ejercicios fiscales 2018/2019 y al 25% a partir de 2020. Por otra parte, se aumentó la alícuota correspondiente a la distribución de dividendos del 7% al 13%, que genera ciertos incentivos para que las empresas reinviertan utilidades para expandir su negocio y evitar el pago del tributo.

A su vez, las modificaciones introducidas permiten la deducción de intereses pagados en conceptos de créditos en la liquidación del impuesto a las ganancias y, en contraposición, se dispuso ampliar la tributación e incluir las ganancias de plazos fijos, incluso alcanzando aquellas generadas por operaciones de títulos públicos y demás valores emitidos por el Estado cuando exista una ley general o especial que disponga la exención de la renta. Del mismo modo, mediante distintas normativas se fueron ampliando las deducciones, incluyéndose el pago del impuesto a los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico asistencial, correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para éste el carácter de cargas de familia. Finalmente, la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública incluyó a los bienes que produzcan ganancia, las primas de seguros que cubran riesgos sobre dichos bienes y las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en aquellos, a la base de cálculo para la deducción del impuesto.

Este breve racconto del impuesto a las ganancias en Argentina nos permite desarrollar una serie de reflexiones relativas a la cuestión. En lo que refiere a la reforma de 1973, podría sostenerse que, dado que la educación es un bien necesario y permite la percepción de la futura ganancia, también debería poder ser considerada para la

deducción del impuesto a las ganancias.

Así, reafirmando lo expuesto en párrafos precedentes, debido a que la educación es un bien esencial que permite generar una mayor ganancia, adicionalmente al pagar impuestos uno debe hacer un esfuerzo extra por abonar todos los gastos asociados a la enseñanza, por lo que éstos deberían ser deducibles.

Y particularmente, más allá de los fundamentos técnicos que se vuelcan en este proyecto, no es simplemente nuestro entendimiento de la crucial importancia de este nuevo camino lo que motiva su representación, sino la creencia firme de que la educación, como el trabajo y la salud, son puntos no negociables para el crecimiento sostenido de nuestro país. No reporta beneficios solamente económicos, sino que su riqueza principal pasa por el efecto permanente que tiene en generaciones de personas, que aprenden a pensar, actuar, desenvolverse e involucrarse en las cuestiones de la vida pública y el quehacer de la política para buscar soluciones de fondo a problemas estructurales que nos aquejan hace décadas.

Entendemos este proyecto no como un mero recurso fiscal para los contribuyentes, sino como un mensaje político a la sociedad argentina; de que no es lo mismo una Argentina que considera a la educación un proceso de inversión sostenida y continua que apunta a mejorar sistemáticamente las condiciones de vida de todas aquellas personas que habitan nuestro suelo y viven del fruto de su esfuerzo y de su trabajo.

Para concluir, mayores niveles de salario permitirían al fisco percibir mayores ingresos tributarios en el futuro, puesto que la recaudación del impuesto a las ganancias, así como los aportes personales y las contribuciones patronales, se calcula sobre el sueldo bruto por trabajador. Inclusive, dado que un mayor nivel de renta futura se asocia a potenciales senderos de crecimiento más altos, la recaudación del impuesto a las ventas (Impuesto al Valor Agregado) también se vería incrementada. Adicionalmente, trabajadores más capaces reducen la tasa de desempleo por dos razones: un trabajador empleado más capacitado puede cambiar de trabajo, dejando una vacante que deberá ser ocupada y, por otro lado, al tener mayores credenciales, se espera que se reduzca la duración del desempleo dada la mayor versatilidad para aplicar a distintos puestos de trabajo (según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el tiempo promedio que pasará desempleado un individuo con título terciario es un 25% menor que aquél con título secundario completo). Esto último, a su vez, presenta beneficios fiscales reduciéndose el gasto social por subsidios de desempleo.

En síntesis, puede afirmarse que aumentar las erogaciones en concepto de educación redundará tanto en una mejora del bienestar individual y colectivo, como también en la posición fiscal del Estado en el futuro debido al incremento de la recaudación y la disminución del gasto social.

Por lo expuesto, se solicita a Vuestra Honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se acompaña.

**Emiliano Benjamín Yacobitti**  
**Diputado Nacional**